



Folio: 090164124001979

P/DUT/7277/2024

TSJCDMX/13C/3

Ciudad de México, a 15 de noviembre del 2024.

**C.
P R E S E N T E**

Con relación a su solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad con el número de folio arriba citado y mediante el cual requiere la información que a continuación se detalla:

090164124001979

Información pública

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

23/10/2024 12:20:35 PM

23/10/2024

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Transparencia local, relativo a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como sujeto obligado de dicha ley, deberá mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que genera y detenta.

Al respecto, solicito los inventarios documentales del periodo 2019-2024, de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

<https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/sala-constitucional/#>

Al respecto se le comunica lo siguiente:

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia estima pertinente, de manera preliminar, hacer énfasis que el tema central de su solicitud está enfocado en recabar información relacionada con la obtención de una glosa documental generada por la Sala Constitucional de este H. Tribunal. Por ello mismo, de igual modo es importante establecer la naturaleza jurídica que rige la documentación generada por los órganos jurisdiccionales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, y de manera particular, la Sala Constitucional, toda vez que el génesis y la consecutiva producción documental de los expedientes judiciales, impide posible contar con un inventario documental como se precisa en la solicitud que hoy se atiende.

En efecto, al tratarse de expedientes creados por la **actividad jurisdiccional**, su naturaleza particular de composición se halla sustentada en el artículo 17, párrafos primero, segundo, tercero, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que a la letra dispone lo siguiente:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

(...)

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

(...).”

De este precepto se erige el régimen jurídico de impartición de justicia, el cual comprende a su vez las formalidades esenciales del procedimiento y la tutela judicial, normatividad suprema que rige, en lo que interesa en el presente caso, la conformación unitaria de los sumarios que concentra la intervención de las partes y demás interesados que intervienen en los juicios.

En efecto, este derecho humano determina la necesidad imperativa de la preservación de todas aquellas actuaciones que anteceden a la emisión de la sentencia definitiva, y en su caso, la eventual ejecución de la resolución judicial, misma que depende tanto de la materia que dio origen al juicio, como la naturaleza propia del órgano jurisdiccional que la emitió, rasgos particulares. El derecho humano para acceder a la tutela judicial, comprende tres etapas:

- i)** una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción;
- ii)** una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y,
- iii)** una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

En este caso, el segundo supuesto entraña la necesidad de un orden archivístico que, por la naturaleza particular de la materia (constitucional, civil, penal, familiar, tutela de derechos humanos y laboral), implica una conformación documental que está regulada por el

ordenamiento jurídico que regula las formalidades procedimentales.

Ahora bien, es importante que se tenga en cuenta que, en el Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial de la Ciudad de México, está previsto un régimen legal que regula la administración de expedientes por el Archivo Judicial, como órgano auxiliar de la función jurisdiccional, tal como está previsto en el artículo 2, fracción IV, 165, 166 y 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que a la letra disponen:

“Artículo 2. La función judicial, se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Por ende, las personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial, en su actuación pública, deberán atender a dichos principios, mismos que implican las siguientes conductas:

(...)

IV. Máxima publicidad. Toda la información en posesión de los órganos públicos que integran al Poder Judicial será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones, que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

(...).

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto funcionamiento del Archivo Judicial, para que éste desarrolle cabalmente sus labores de auxiliar de los órganos judiciales de la Ciudad de México.

Artículo 166. Se depositarán en el Archivo Judicial:

- I. Todos los expedientes, tocas y testimonios concluidos del orden civil y penal;***
- II. Los expedientes del orden civil que, aun cuando no estén concluidos, hayan dejado de tramitarse por cualquier motivo durante seis meses;***
- III. Cualesquiera otros expedientes concluidos que conforme a la ley se integren por los órganos judiciales de la Ciudad de México y cuya remisión o entrega no haya de hacerse a oficina determinada o a los particulares interesados, respectivamente;***
- IV. Los expedientes y documentos que remita el Consejo de la Judicatura, y***
- V. Los demás documentos que las leyes determinen.***

En todos los casos a que se refieren las fracciones anteriores, deberá atenderse al Reglamento de Archivos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, siendo facultad exclusiva del órgano jurisdiccional o de éste Consejo, según corresponda, determinar qué expedientes son susceptibles de depuración, en términos del Reglamento respectivo, debiendo determinarlo así en aquél acuerdo que ordene su remisión al

Archivo Judicial para tales efectos.

En aquellos casos en que el expediente haya de remitirse únicamente para su debido resguardo, no será necesario acuerdo alguno al respecto.

Al devolver el Archivo Judicial un expediente para su radicación en el juzgado, el Titular del órgano jurisdiccional al dictar el primer auto que recaiga a esa remisión deberá hacer del conocimiento de las partes sobre la posibilidad de que una vez concluido en su totalidad el expediente, será destruido, previa digitalización del mismo.

Artículo 167. Habrá en el archivo siete secciones: civil, familiar, penal, administrativa, laboral y constitucional y del Consejo de la Judicatura, mismas que se dividirán de acuerdo con el reglamento respectivo.”
(sic)

De acuerdo al anterior orden de ideas, es importante que se tenga en cuenta que el registro relativo a los expedientes derivados de la actividad jurisdiccional por los juzgados y salas, debido a su naturaleza particular, su producción, registro, clasificación, orden y conservación depende del ejercicio de las facultades, competencia y atribuciones que desempeñan los órganos jurisdiccionales, según la normatividad jurídica en la cual se apoya su función de impartición de justicia.

Además, también cabe sostener que los expedientes judiciales deben su manufactura, registro, archivo, conservación e inventario, por el régimen jurídico imperante que regula, tanto los funcionarios responsables en su manejo institucional, como la materia sustantiva del cual deriva.

En primer término, se cuenta con los artículos 79, 80 y 81, fracciones IX, XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que disponen lo siguiente:

“Artículo 79. Cada uno de los Juzgados a que se refiere este capítulo, contará con el siguiente personal:

- I. Un Titular, Jueza o Juez, que atenderá proporcional y equitativamente las cargas de trabajo con el objeto de lograr que el conocimiento de los asuntos a su cargo, se realice de manera inmediata y expedita;***
- II. Las y los Secretarios de Acuerdos, Conciliadores, Proyectistas y Actuarios que requiera el servicio, y tratándose de Juzgados de Proceso Oral en materia Familiar, las Secretarías Judiciales y Auxiliares que requiera el servicio (...).***

Artículo 80. La persona Titular de la Secretaría de Acuerdos que determine el Juzgador, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo, dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones de su superior jerárquico y lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un mes.

Artículo 81. Son obligaciones de la o el Secretario de Acuerdos y de las y los Secretarios Auxiliares.

(...)

IX. Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras se encuentren en trámite en el órgano jurisdiccional y entregarlos con las formalidades legales, cuando deba tener lugar la remisión;

(...)

XI. Cuidar y vigilar que el archivo se arregle por orden alfabético, de apellidos del actor o del promovente en asuntos de jurisdicción voluntaria;

XII. Remitir los expedientes al Archivo Judicial, a la superioridad o al substituto legal, previo registro en sus respectivos casos, conforme a los lineamientos marcados en esta ley.”

En tales preceptos se describe la función genérica que desempeña el Secretario de Acuerdos que labora en los órganos jurisdiccionales en materia civil, familiar, penal, tanto en proceso escrito como oral, tal como está previsto en los artículos 82, 83, 91, de la Ley Orgánica, pero de manera particular, se aplica de manera supletoria a la **Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México** (publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2019), tal como lo dispone en su artículo 9, que se transcribe a continuación:

Artículo 9.- El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para el ejercicio de las atribuciones de la Sala Constitucional, atendiendo a los principios de racionalidad y optimización en el ejercicio del gasto público.

La Sala Constitucional no contará con personal adscrito a ella, salvo el Secretario General de Acuerdos y el Secretario Proyectista, quienes serán nombrados por el Presidente de la Sala y deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título profesional de licenciatura en derecho y cédula expedida por una institución legalmente autorizada;

III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos acreditados en torno a derecho procesal constitucional, teoría de la constitución y derechos fundamentales;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sufrido condena por delito doloso con sanción privativa de libertad.

La Secretaría General de Acuerdos y el Secretario Proyectista, durarán en su encargo 4 años, salvo renuncia expresa o destitución fundada y motivada por el Pleno de la Sala. Se encargará de la organización jurisdiccional de los asuntos y la administración de dicha Sala Constitucional.

Ambas Secretarías tendrán las atribuciones y obligaciones propias del encargo que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior Justicia

de la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para que la Sala Constitucional pueda contar con espacios para celebrar sus sesiones, así como recursos materiales para su funcionamiento.

A mayor abundamiento, es importante que se tenga en cuenta que la legislación procesal aplicable en materia civil-familiar y penal, establecen los elementos distintivos que imperan en la conformación de la documentación archivística judicial que, debido a su naturaleza, no es posible que sea incorporada al inventario que indica el solicitante.

Ahora bien, en este punto es dable tener en consideración el artículo tercero transitorio del decreto promulgatorio de la **Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México**, en la que se dispone la derogación de diversas disposiciones de la **Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial la Ciudad de México** (publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018), quedando vigentes aquellas disposiciones aplicables a normatividad procesal que rige en ante dicha Sala. De los preceptos supérstites del ordenamiento legal mencionado en segundo lugar, se halla el artículo 14, que a la letra dispone lo siguiente:

Artículo 14.- A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y los principios generales del derecho.

Luego entonces, considerando el espíritu legal que establece el precepto antes transcrito, se aplica de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el cual aún se encuentra vigente para los fines archivísticos que hoy nos ocupan, y de manera singular, en relación al tema de su solicitud, son aplicables los artículos 56 fracciones I y IV, y 57, que disponen lo siguiente:

“ARTICULO 56

Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas:

I.- Todos los ocurso de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiese firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos señalados, dará lugar a que no se obsequie la petición que se contenga en el escrito respectivo;

IV.- Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto (...).

ARTICULO 57

Todos los expedientes se llevarán en la forma y para los fines que se precisan en este Código.”

A partir de lo sustentado en las líneas anteriores, como se ha venido explicando, **los expedientes judiciales** en su proceso de creación y de conformación cumplen con las disposiciones normativas (tanto sustantivas y especialmente las procesales) que los regulan, subrayando que tales disposiciones están en estrecha armonía con el derecho a la verdad que es inherente al derecho humano de tutela judicial, sin embargo, y en razón de la particularidad documental que los caracteriza, no pueden tener un ciclo de vida como el de un expediente administrativo, razón el cual es que el universo documental de los sumarios que se crean debido a la función jurisdiccional que desempeña la Sala Constitucional, no pueden ser tratados para una baja documental e inventariados para tal fin.

En concordancia con la anterior disertación, es de trascendental importancia citar el Reglamento de los Sistemas Institucionales de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, ordenamiento normativo expedido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante Acuerdo 13-11/2022, y publicado a través de la Circular CJCDMX 215/2022, en el Boletín Judicial No. 49, de fecha 22 de marzo de 2022. De este ordenamiento se destaca el artículo 35, que dispone lo siguiente:

“Artículo 35. Los Órganos Jurisdiccionales en plenitud de jurisdicción, deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trata de la última resolución, bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, sobreseimiento, o por cualquier otra causa que señale la norma, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan integrado con las copias simples exhibidas por las partes o sujetos de procedimientos en términos de los códigos procesales aplicables en materia de que se trate, los cuadernillos de amparo también conocidos amparos buscadores, etc., a través de las cuales puede proceder a la baja documental de los acervos que se encuentran en resguardo en sus archivos.

Por lo que, mediante el acuerdo o auto que se sirva dictar en cada una de las determinaciones que corresponde a las figuras jurídicas referidas, deben notificar a las personas promoventes o promoventes y/o sujetos del procedimiento que una vez transcurrido el término de noventa días naturales de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo o auto, procederá a la baja de los documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada, por lo que dentro del plazo concedido deberán solicitar su devolución.” (sic)

Al hacer una lectura detallada de este precepto, se desprende lo siguiente:

- Se hace énfasis en la cita de diversas figuras procesales previstas en los códigos adjetivos que regulan las etapas procesales que conforman el derecho de la tutela judicial, y de manera particular, aquellas que derivan cualquier forma de culminación de un proceso jurisdiccional, hipótesis normativas cuya consecuencia procedimental es el finiquito de un sumario.
- Sin embargo, el objeto legal de esta disposición permite que los órganos jurisdiccionales la plena facultad para determinar los casos en los cuales un expediente judicial puede ser motivo de baja, sin embargo, dada la naturaleza jurídica de los expedientes generados por la actividad jurisdiccional, implican determinadas condiciones procesales que deben observarse ante las partes procesales y/o sujetos de procedimiento (en apego al principio de legalidad previsto en el artículo 14 constitucional y principio de debido proceso, contenido en el numeral 16 de la ley fundamental).

Así entonces, a modo de conclusión, es importante que tome en cuenta la presente explicación relacionada con la naturaleza jurídica de los expedientes generados por la función judicial de los órganos jurisdiccionales que integra este H. Tribunal.

SEGUNDO. Se informa que su solicitud fue gestionada ante la **Presidencia de la Sala Constitucional** y la **Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales**, instancias que aportaron sus respectivos informes que se desglosan en el presente documento.

TERCERO. Se cuenta con la respuesta que aporta la **Presidencia de la Sala Constitucional**, que en relación al tema de su requerimiento dice:

“(...) en el ámbito de la competencia de esta Sala Constitucional, se da respuesta con el siguiente cuadro:

<p><i>“En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Transparencia local, relativo a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como sujeto obligado de dicha ley, deberá mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que genera y detenta.</i></p> <p><i>Al respecto, solicito los inventarios documentales del periodo 2019-2024, de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder</i></p>	<p><i>Desde la fecha de instauración de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir desde el 1° de diciembre de 2019 a la fecha en que se da respuesta, se hace del conocimiento a la o él solicitante lo siguiente:</i></p> <p><i>Asuntos Ingresados a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.</i></p> <p><i>Año 2019: 0</i></p> <p><i>Año 2020: 5</i></p> <p><i>Año 2021: 38</i></p>
--	--

Judicial de la Ciudad de México.”	Año 2022: 69 Año 2023: 43 Año 2024: 26 Total: 181
--	--

CUARTO. Se cuenta con la respuesta que proporciona la **Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales**, en la cual sostiene:

“Al respecto me permito manifestar que, se realizó una búsqueda dentro de las bases de datos con las que cuenta esta Dependencia, de la cual se desprende que no existe registro alguno de inventarios documentales provenientes de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La información mencionada en el párrafo anterior, fue confirmada mediante llamada telefónica realizada el día 6 de noviembre de 2024, con el Doctor Jaime López Ruelas, Secretario General de Acuerdos de la Sala Constitucional, quien confirma que a la fecha no se ha archivado acervo documental institucional alguno a esta Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales, ya que los procedimientos judiciales se encuentran en trámite y no se han sido considerados como concluidos. Motivo por el cual no es posible atender lo solicitado por el peticionario.” (sic)

Así entonces, de manera específica, se desprende que la información que rinde tanto la **Presidencia de la Sala Constitucional** como la **Dirección del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público de Avisos Judiciales**, es con la que se cuenta y se proporciona en la condición como se ha procesado hasta este momento.

Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al artículo cuadragésimo cuarto de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se comunica a usted que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, puede presentar un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en apego a los artículos 233, 234, 235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de ellas, derivadas de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública.

El Recurso de Revisión deberá presentarse por medios electrónicos, por escrito libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o mediante el Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), o por conducto del correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro de los 15 días hábiles posteriores contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; o el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiera sido entregada, conforme al artículo 236 de la ley citada

Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en el artículo 6, fracción XLII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,

Reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. ALFONSO SANDOVAL SERVÍN

Elaboró: Lic. Benito Guillermo Pérez López

EVIDENCIA CRIPTOGRAFICA - TRANSACCION

Archivo Firmado: 090164124001979 R (ARCHIVO JUD RESPUESTA Anónimo) INVENTARIO DOCUMENTAL SALA CONSTITUCIONAL

Autoridad Certificadora del Poder Judicial de la Ciudad de México

Firmante(s): 1

Hoja(s): 10

Folio: 3D6C79C8-25CF-4252-A15E-5049C0FECD71

Firmantes				Firmas	
Nombre(s):	ALFONSO SANDOVAL SERVIN	Validez:	Vigente	No Serie:	70.6a.63.64.6d.78.32.30.30.30.36.30.38.34
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	15/11/24 21:09:59 - 15/11/24 15:09:59				
Nombre del respondedor(es):	Servicio delegado OCSP de la AC del Poder Judicial de la CDMX				
Emisor(es) del respondedor(es):	Autoridad Certificadora del Poder Judicial de la Ciudad de México				
Numero(s) de serie:	70.6a.63.64.6d.78.32.30.32				
TSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	15/11/24 21:10:00 - 15/11/24 15:10:00				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Entidad Emisora de Sellos de Tiempo del Poder Judicial de la Ciudad de México				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora del Poder Judicial de la Ciudad de México				
Sellos Digitales					
29 64 45 3a bc fd ba c4 66 80 49 d5 f5 78 0d 02 da cc fc ac 84 ec 45 7d d9 57 7f d0 bb 59 9b 81 47 ff ac 1e 8e 19 6f b3 9a 10 5f					